



## **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Proceso:** ESPECIAL - FUERO SINDICAL  
**Radicado:** 05001-31-05-016-2021-00090-02 (F2-22-352)  
**Accionante:** EDUIN DE JESÚS GÓMEZ GALLEGO  
**Accionada:** COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A., SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S  
**Procedencia:** JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA n.º 63  
**Asunto:** ACCIÓN ESPECIAL DE REINTEGRO

En Medellín, a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ESPECIAL de FUERO SINDICAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-016-2021-00090-02 (F2-22-352), instaurado por EDUIN DE JESÚS GÓMEZ GALLEGO en contra de la COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A. y donde fueron integradas como litisconsorte necesario las sociedades SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S, con el fin de resolver el recurso de apelación promovido por las demandadas TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A., SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S., respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 06 de septiembre de 2022 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “...[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

## 1. ANTECEDENTES

El señor EDUIN DE JESÚS GÓMEZ GALLEGO, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda especial de FUERO SINDICAL en contra de la COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A., en procura de que se declare que entre las partes existió una relación de trabajo entre el 13 de febrero de 2004 y el 29 de diciembre de 2020, que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo suscrita por la demandada con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA – SINTRAVALORES, y que estaba amparado por fuero sindical para la fecha de la terminación del vínculo contractual sin justa causa ni autorización del juez del trabajo. Como consecuencia de lo anterior, aspira obtener el reintegro al mismo puesto de trabajo, o a uno de igual o mejor categoría y salario, junto con el pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales dejados de percibir desde la fecha del despido, y hasta la fecha en que se verifique su reincorporación.

Como fundamento fáctico de la acción, señaló que laboró al servicio de la COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A., en lo sucesivo, PROSEGUR, entre el 13 de febrero de 2004 y el 29 de diciembre de 2020; que la contratación se produjo con la intermediación de EMPOSER LTDA. y SEGURIDAD COSMOS LTDA.; que desempeñaba el cargo de operador de control, devengando un salario promedio mensual de \$1.399.000; prestaba sus servicios en las instalaciones de PROSEGUR S.A. en la ciudad de Medellín; a lo largo de la relación de trabajo fue dotado con los uniformes, el carné de identificación, y armamento de propiedad de PROSEGUR S.A.. De igual forma, expone que era capacitado y supervisado por la empresa accionada, cumplía con los horarios y órdenes asignadas por la compañía demandada; que al interior de PROSEGUR S.A. se conformó el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE PROSEGUR DE COLOMBIA – SINTRAVALORES, al que se afilió desde el 12 de octubre de 2016; que PROSEGUR S.A. y el sindicato SINTRAVALORES suscribieron una Convención Colectiva de Trabajo que se aplica a todos los trabajadores de la entidad, en la que se pactó que los trabajadores que prestaran sus servicios en favor de PROSEGUR S.A., serían vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido; que al interior de la compañía demandada también se conformó el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE PROSEGUR DE COLOMBIA – SINALTRAPROSEGUR, se afilió a dicha organización desde el 21 de agosto de 2018, cuya afiliación fue notificada a PROSEGUR S.A. el día 23 del mismo mes y año, siendo elegido como Tesorero de la Junta Directiva nacional de SINALTRAPROSEGUR, en la asamblea del 09 de diciembre de 2018; que su nombramiento fue notificado a PROSEGUR S.A. desde el 13

de diciembre de 2018, y que el 29 de diciembre de 2020, PROSEGUR S.A. dio por terminado unilateralmente y sin justa causa, el contrato de trabajo, sin previa autorización judicial.

### **1.1. Trámite de primera instancia**

La demanda se admitió mediante auto el 11 de marzo de 2021 (doc.03, carp.01), en el que se ordenó la notificación de la COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A., y del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE PROSEGUR DE COLOMBIA – SINALTRAPROSEGUR, la que se surtió a través del presidente de la Junta Directiva Nacional (doc.08, carp.01). La sociedad convidada a juicio dio contestación a la demanda de manera oral en audiencia del 16 de julio de 2021 (doc.12, carp.01). Frente a los hechos aceptó como ciertos aquellos que aluden al cambio de su razón social, la existencia de las organizaciones sindicales SINALTRAPROSEGUR y SINTRAVALORES, y la comunicación donde le fue informada la elección del promotor como tesorero del primero de esta agremiaciones, manifestando no ser ciertos o no constarle los demás.

Seguidamente, se dispuso la vinculación de las sociedades SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S., quienes al unísono se opusieron a las súplicas instadas por el actor y afirmaron no constarle ninguna de las situaciones fácticas narradas en el escrito introductorio.

En su defensa presentaron como excepciones de mérito las que nominaron como cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, falta de título y causa, prescripción, compensación y buena fe (docs.25 y 50, carp.01).

### **1.2. Decisión de Primera Instancia**

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 06 de septiembre de 2022 (docs.65 a 67, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, con la que decidió acceder a lo pretendido por la parte accionante, disponiendo el reintegro, como consecuencia de la protección especial derivada del fuero sindical del que es beneficiario el actor, y así ordenó solidariamente a las demandadas a reconocer y pagar “...los salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, a que tenga derecho dejados de percibir por ese interregno de tiempo y hasta cuando ocurra el reintegro...”, no sin antes declarar la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y la sociedad PROSEGUR, el cual estuvo vigente a partir del 13 de febrero de 2004.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado luego de relacionar y describir el contenido y alcance de las pruebas documentales allegadas al cartulario, tales como, el carné, el material fotográfico y los certificados de formación académica, concluyó en la prestación personal del servicio por cuenta del promotor y a favor de PROSEGUR, lo que confrontó y corroboró con las declaraciones de los testigos citados y, aún, con la confesión de la apoderada de este ente societario, cuando fue increpada durante el acopio probatorio.

En sustento de la decisión señaló que, dado el tiempo que estuvo prestando el actor su fuerza de trabajo en el cargo de Operador de Control al servicio de PROSEGUR y la similitud del objeto social de ésta con el de las demás accionadas, no encontró justificación atendible para que el accionante no fuera contratado directamente. Por lo anterior y al ser despedido sin justa causa por parte de su verdadero empleador mientras gozaba de la garantía foral, es por lo que dispuso el reintegro deprecado y el pago solidario de las acreencias laborales que se causaron desde su desvinculación y hasta tanto se produjera el reintegro al servicio (minuto 57:16 a 01:56:00, doc.65, carp.01).

### **1.3. Recurso de Apelación**

El procurador judicial de las sociedades PROSEGUR, SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S., inconforme con la sentencia, interpuso recurso de apelación, dirigido a que se revoque la decisión adoptada en primera instancia, para en su lugar, se desestimen las súplicas de la demanda.

Con tal propósito, luego de cuestionar la validez y eficacia de las pruebas de oficio que fueran decretadas por el accionante y las que se encontraban pendientes por practicar, sostuvo que la decisión de primer grado se basó en apreciaciones y creencias personales, en contravía a lo dispuesto en el artículo 230 de la CP. Señaló que en la actuación procesal no se valoró lo confesado por el promotor del juicio al momento de absolver el interrogatorio de parte, así como tampoco los contratos comerciales suscritos con SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S., que a su juicio, justificaron la prestación del servicio de seguridad con personal armado, máxime cuando la sociedad PROSEGUR corresponde a una de naturaleza anónima y no puede ni está autorizada para prestar el servicio de vigilancia. Refuta la credibilidad de los testigos y del representante legal de la organización sindical SINALTRAPROSEGUR, los primeros por su interés en las results del proceso y las extremas coincidencias en su relato, mientras que el segundo, por motivo de identificarse como Presidente de la organización sindical de trabajadores sin detentar tal calidad. Insiste en señalar que no se acreditó en plenario que los elementos de trabajo eran de propiedad de

PROSEGUR, y que el actor reconocía a la sociedad SEGURIDAD COSMOS LTDA como su empleador, y en esa condición recibía y aceptaba mensualmente el pago del salario.

Explicó que la afiliación a las organizaciones sindicales no reviste de validez, al tener estas carácter de empresa y al no ser el demandante trabajador de PROSEGUR, mal podía vincularse a estos sindicatos. Precisó que el sentenciador de instancia se excedió en las facultades *ultra y extra petita*, particularmente en la responsabilidad solidaria que dispensó, pues tal pretensión no se encontraba inmersa en el petitum de la demanda, a la par que, las acreencias laborales fueron reconocidas y pagadas durante todo el tiempo que el actor estuvo vinculado con las sociedades contratistas (minuto 01:56:13 a 02:17:03, doc.65, carp.01).

#### **1.4. Trámite de Segunda Instancia**

Conforme a lo previsto en el artículo 117 del CPTSS, la decisión de segunda instancia se adoptará de plano, previa deliberación de la Sala.

### **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las sociedades demandadas PROSEGUR, SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

#### **2.1. Problema jurídico**

El *thema decidendi* se contrae a determinar si de cara al principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades estipuladas por los sujetos de las relaciones laborales (artículo 53 de la CP), se verifica una verdadera relación laboral entre el promotor de la litis y la accionada PROSEGUR, para ulteriormente verificar la condición de simple intermediario que atribuyó el juzgador de primera instancia a las accionadas SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S., de frente a justificar la responsabilidad solidaria de estas en las condenas dispensadas.

#### **2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala**

La Sala confirmará la decisión de primer grado, considerando que la convalidada a juicio PROSEGUR, no logró derruir la presunción *iuris tantum* de que trata el artículo 24 del CST, al

no probar la autonomía financiera, técnica y administrativa con las que actuaban las demandadas SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S., y que caracterizan la figura de tercerización laboral. Asimismo, la condición de simple intermediaria de las sociedades antes mencionadas constituye un hecho discutido y probado ampliamente en juicio, resultando procedente declarar a las mismas como deudoras solidarias de las acreencias laborales que se causaron a favor del libelista, con arreglo a lo señalado en el artículo 35 del CST y las facultades *ultra y extra petita* consagradas en el artículo 50 del estatuto procesal laboral.

### 2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el señor EDUIN DE JESÚS GÓMEZ GALLEGO suscribió un contrato de trabajo a término indefinido con la sociedad EMPOSER S.A.S. a partir del 13 de febrero de 2004, desempeñando el cargo de Operador de Control (pág.227, doc.02, carp.01; págs.9 a 12, doc.10, carp.01; doc.34, carp.01; doc.57, carp.01); que a partir del 16 de diciembre de 2016 el señor EDUIN DE JESÚS GÓMEZ GALLEGO se incorporó a la nómina de trabajadores de la sociedad SEGURIDAD COSMOS LTDA por virtud de una sustitución patronal (págs.228, doc.02, carp.01; págs.13 y 37, doc.10, carp.01; doc.31, carp.01; doc.44, carp.01; doc.62, carp.01); que el 14 de enero de 2000 las sociedades EMPOSER S.A. y THOMAS GREG & SONS TRANSPORTADORA DE VALORES S.A., hoy PROSEGUR, celebraron un contrato de prestación de servicios independientes de escolta y vigilancia fija y

móvil con armas de fuego (págs.164 a 168, doc.02, carp.01; págs.27 a 31, doc.11, carp.01; doc.56, carp.01); que el 30 de abril de 2008 EMPOSER S.A. y THOMAS GREG & SONS TRANSPORTADORA DE VALORES S.A., hoy PROSEGUR, suscribieron otro número 1 al contrato de prestación de servicios independientes para modificar el valor, la duración y las obligaciones de las partes (págs.169 a 172, doc.02, carp.01); que la sociedad PROSEGUR fue constituida el 05 de julio de 1963 (págs.208 a 215, doc.02, carp.01; doc.05, carp.01); que la sociedad SEGURIDAD COSMOS LTDA terminó de manera unilateral y sin justa causa la relación de trabajo con el demandante señor EDUIN DE JESÚS GÓMEZ GALLEGO a partir del 29 de diciembre de 2020 (pág.61, doc.10, carp.01; doc.45, carp.01), y que entre SEGURIDAD COSMOS LTDA y PROSEGUR S.A. se pactó el 08 de agosto de 2013 un contrato de colaboración empresarial, el cual fue modificado en agosto de 2014 (págs.12 a 26, doc.11, carp.01; doc.33, carp.01).

Adicionalmente, no se discute la existencia de los colectivos de trabajadores denominados SINTRAVALORES y SINALTRAPROSEGUR, así como la afiliación del actor a aquellos (págs.239, 241, y 244 a 249, doc.02, carp.01), que entre SINTRAVALORES y PROSEGUR celebraron dos convenciones colectivas (págs.35 a 115, doc.02, carp.01), y que el impulsor procesal es miembro de la junta directiva de la organización sindical SINALTRAPROSEGUR ejerciendo el cargo de Tesorero (págs.242 a 243 y 245 a 249, doc.02, carp.01).

### **2.3.1. El Contrato de Trabajo**

El derecho al trabajo ha sido reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como un valor esencial del Estado Social de Derecho, y por ello en el Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 25, 39, 48, 55, 56 y 64 de la Constitución Política y el legislador se ocuparon de brindarle una atención especial, reconociéndolo como aquel que le asiste a toda persona para pretender y obtener un trabajo en condiciones dignas, no solo como un mecanismo para asegurar el mínimo vital y nivel de vida digna, sino también como un requisito esencial para la concreción de la libertad, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad. El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona natural, denominada trabajador, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, denominada empleador, bajo su continuada dependencia o subordinación, servicio por el cual recibe una remuneración (artículo 22 del CST). Para que se dé una relación de trabajo protegida por la legislación laboral, debe concurrir una tríada de elementos esenciales, cuales son: (i) que la actividad desplegada por el trabajador sea personal, es decir, realizada por sí mismo; (ii) una continua subordinación o dependencia del trabajador, la que faculta al empleador para imponerle reglamentos y exigirle el cumplimiento de órdenes en cuanto al tiempo, modo, calidad y lugar, y (iii) la retribución del servicio, mediante el pago del salario convenido por las partes (artículo 23 del CST).

Reunidos estos elementos, se presume que existe un contrato de trabajo, y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni por las condiciones o modalidades contractuales que se estipulen (artículo 24 del CST), y por consiguiente, al trabajador solo le basta demostrar la ejecución o prestación personal de un servicio, para que opere en su favor la presunción de la existencia de un vínculo laboral (CSJ SL del 29-11-1958; SL del 05-05-1982, radicado 8247; SL del 27-06-2000, radicado 14096; SL del 17-05-2011, radicado 38182; SL-10546 del 06-08-2014, radicado 41839; SL-15507 del 11-11-2015, radicado 45068; SL-16528 del 26-10-2016, radicado 46704; SL-6621 del 03-05-2017, SL-781 del 14-03-2018, radicado 47852; radicado 65768; SL-4444 del 16-10-2019, radicado 58413; SL-577 del 12-02-2020, radicado 68636; SL-3126 del 19-05-2021, radicado 68162; SL 3847 del 25-08-2021, radicado 79919); aclarando la Sala que esta presunción no releva al trabajador demandante de otras cargas probatorias tendientes a demostrar las condiciones en las que desarrolló la labor, a saber, la fecha de ingreso y retiro, salario, cargo o jornada, siguiendo los lineamientos trazados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en diversas oportunidades, entre otras, la sentencia del de 05-08-2009, radicado No. 36549 y más recientemente la dictada el 06-06-2019, radicado 58895 y del 01-12-2020, radicado 76645.

De lo hasta aquí discurrido, cristalino despunta que es deber del trabajador demandante en los conflictos de esta naturaleza, presentar al juzgador los elementos de persuasión que den cuenta de la prestación personal del servicio a favor de quien ostenta la condición de verdadero empleador, para así activar la presunción contenida en el artículo 24 del CST, de acuerdo con la carga probatoria que le impone el artículo 167 del CGP.

Para el caso concreto y en lo atinente a la prestación personal del servicio alegada en favor de PROSEGUR, se allegó como medios de prueba **i.** Carné con logo de PROSEGUR (pág.229, doc.02, carp.01); **ii.** Material fotográfico (págs.231 a 233, doc.02, carp.01); **iii.** Certificaciones de eventos académicos expedidos por el Director Académico del Departamento de Capacitación de PROSEGUR (págs.237 y 238, doc.02, carp.01); **iv.** Registro de firmas, datos básicos de identificación y fotografías del personal autorizado por PROSEGUR para recibir o entregar valores en sus instalaciones y los datos de identificación de los vehículos blindados (págs.240 y 251 a 277, doc.02, carp.01).

Aunado a lo anterior, se recibieron los testimonios de Nora Elena Cardona Rengifo, Diego Alejandro Sánchez Gómez, de Alejandro Colorado, representante legal del sindicato SINALTRAPROSEGUR y el interrogatorio de parte absuelto por el accionante.

La señora Nora Elena Cardona Rengifo indicó que fue compañera de trabajo del demandante en la sociedad PROSEGUR por un lapso de 16 años, desempeñando ambos el cargo de operador de control y compartiendo el mismo puesto de trabajo. En tal condición recordó que dentro de las funciones del actor se encontraba todo lo relacionado con requisas, operación de cámara y de controles, siendo su lugar de trabajo las instalaciones de Prosegur en la ciudad de Medellín. Informa que las personas que le impartían órdenes al actor respondían a los nombres de Carlos Carrera, Cristian Dávila y Norberto Zamora, quienes están vinculados a Prosegur; lo que sabe y le consta por cuanto aquellos portaban el carné de esa sociedad. Agrega que las vacaciones del actor eran autorizadas por Prosegur en una programación que era remitida en el mes de diciembre y se publicaba en la oficina de rutas a la vista de todo el personal. Recuerda que el accionante para poder retirarse de su sitio de trabajo debía solicitar permiso al señor Cristian Dávila, no sin antes negar que en las instalaciones de Prosegur funcionaran las sociedades SEGURIDAD COSMOS LTDA o EMPOSER S.A.S.

Así mismo, asienta que el salario del actor era pagado por Prosegur, reconociendo que, no obstante, durante el tiempo que lo conoció, no revisó sus comprobantes de nómina. Sostiene que el demandante no manejaba armas, sino que, por el contrario, el arma estaba asignada al puesto de trabajo y allí permanecía. Cuando se le indaga frente a las solicitudes suscritas por el actor tendientes a reemplazar al personal que labora en los vehículos blindados, aduce que la empresa Prosegur hacía suscribir dichas solicitudes, sin embargo, no estuvo presente cuando el actor suscribía dichas solicitudes (minuto 01:59:01 a 02:14:24, doc.12, carp.01).

Diego Alejandro Sánchez Gómez aseveró que fue compañero de trabajo del actor desde el año 2011 y hasta finales del año 2020, aseverando que es empleado directo de Prosegur por haber prestado servicios en las instalaciones de esta sociedad y encontrarse sujeto a las órdenes de la misma, y añade que el demandante desempeñó el cargo de Operador de Control de Cámaras y Video. Al momento que se le pregunta por las herramientas o elementos de trabajo, supone que las cámaras de seguridad eran de propiedad de Prosegur por cuanto se encontraban dentro de las instalaciones de esta sociedad. Continúa su relato aseverando que el señor Carlos Carrera era el jefe directo del demandante, hasta la fecha en que éste se trasladó a la sede del sector de El Poblado. Contó que las vacaciones eran autorizadas por Prosegur y el listado era publicado en sus oficinas; considerando que los permisos que debía solicitar el demandante eran tramitados y concedidos por el señor Carlos Carrera, trabajador que se encontraba a cargo del área de seguridad, lo que le consta al haber prestado sus servicios durante un mes en la misma área donde se encontraba el demandante y fue allí cuando se percató que las órdenes las impartía el susodicho señor Carrera (minuto 02:17:31 a 02:33:30, doc.12, carp.01).

El Presidente de la organización sindical SINALTRAPROSEGUR, Alejandro Colorado Rojas, relató que conforme con la CCT, tiene un contrato realidad con Prosegur y señaló de intermediarias a las sociedades SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S. Adujo que ha sido escolta especializado y siempre ha prestado sus servicios a Prosegur, por lo que sabe y le consta que todos los trabajadores, incluyendo al demandante, portan carné y uniformes con las insignias o logos de Prosegur. Frente a la notificación a la sociedad Prosegur del nombramiento del promotor como miembro de la junta directiva, recordó que luego de la radicación de la comunicación en tal sentido, esta sociedad no la objetó. Apunta que el señor Cristian Dávila Ávalos, Gerente de Prosegur, es el jefe inmediato del demandante, y fue la persona que le entregó la carta de terminación del contrato de trabajo a este último. Finalmente resalta que todo el personal es vinculado a Prosegur y no a otra sociedad (minuto 01:32:14 a 01:53:47, doc.12, carp.01).

El accionante señor EDUIN DE JESÚS GÓMEZ GALLEGUO afirmó que inició a prestar sus servicios en favor de PROSEGUR en el cargo de portero y luego de un año fue nombrado como Operario de Control, teniendo entre sus funciones, además de monitorear las cámaras y la requisa del personal y la movilización en servicio de transporte. Que a pesar de haber firmado un contrato con la sociedad EMPOSER siempre prestó sus servicios en las oficinas de PROSEGUR, aclarando que no conoció las instalaciones de EMPOSER en la ciudad de Medellín. Frente a los elementos de trabajo, aduce que el arma que utilizaba le fue entregada por los señores Norberto Zamora y Carlos Carrera, armamento que tenía salvoconducto a nombre de PROSEGUR.

Cuenta que no suscribió contrato alguno con PROSEGUR ni percibe remuneración alguna de su parte, sin embargo indicó que las órdenes que debía acatar, eran impartidas por trabajadores de esta sociedad, como lo son Cristian Dávila, Norberto Zamora y Carlos Aníbal Carrera; recordando que la relación de trabajo se finiquitó con una comunicación que provenía de la sociedad SEGURIDAD COSMOS LTDA, pero fue el señor Anderson Arriola, trabajador de PROSEGUR, quien se la entregó. En cuanto a la organización sindical, reconoció que no tenía conocimiento que se trataba de un sindicato de empresa y que no le era deducida la cuota sindical. Puso de presente que PROSEGUR le proporcionó la formación en cursos y le entregó medalla por los 10 años de servicios. Confesó que tuvo conocimiento de la sustitución patronal que se surtió entre EMPOSER S.A.S. y SEGURIDAD COSMOS LTDA, pero que se negó a firmar el recibido de dicho documento.

Escrutados entonces los medios de convicción que fueran arrimados al plenario, es del caso concluir, sin hesitación alguna, que en el *sub lite*, la parte demandante demostró de manera fehaciente haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del pretenso empleador, a partir del

13 de febrero de 2004, ejerciendo las labores de Operador de Control. Inferencia que se logra a partir de lo depuesto por los testigos Nora Elena Cardona Rengifo y Diego Alejandro Sánchez Gómez, quienes fueron contestes en afirmar que el actor en todo momento prestó sus servicios en las instalaciones de Prosegur, describiendo las funciones de vigilancia, junto con las actividades de requisa y control de cámaras que desarrollaba dentro de su jornada laboral. Así también que, las órdenes eran impartidas por personal vinculado directamente a la empresa Prosegur, como lo fueron los señores Carlos Carrera, Cristian Dávila y Norberto Zamora, aspecto sustancial que les consta al percatarse que estos, además de portar carnés y chaquetas con los logos de esta sociedad, se identificaban como trabajadores al servicio del ente societario.

En línea con lo anterior, para la Sala, la versión que de los hechos narran los testigos arriba mencionados, ofrece serios motivos de credibilidad, pues tuvieron un conocimiento directo e inmediato de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el accionante prestó sus servicios, pues mientras que la señora Nora Cardona Rengifo fue compañera de trabajo de aquel por un lapso de 16 años, el señor Sánchez Gómez, compartió con el actor el puesto de trabajo durante un mes, medios de convicción que, como se antelara, permiten inferir la prestación personal del servicio echada de menos por el impugnante.

A lo anterior se aúna la profusa prueba documental que fue allegada en el tracto procesal, como lo son el carné con logo de Prosegur otorgado al demandante (pág.229, doc.02, carp.01), las certificaciones de eventos académicos expedidos a este por parte del Director Académico del Departamento de Capacitación de PROSEGUR (págs.237 y 238, doc.02, carp.01), y más revelador aún, la inclusión del demandante en el registro de firmas, datos básicos de identificación y fotografías del personal autorizado por PROSEGUR para recibir o entregar valores en sus instalaciones (págs.240 y 251 a 277, doc.02, carp.01).

Ahora bien, a fin de responder los cuestionamientos que presentó el censor frente a la credibilidad e imparcialidad de los testigos traídos a juicio, esta Sala de Decisión ciertamente no desconoce que, conforme con lo previsto en el artículo 61 del CPTSS, el juzgador debe restarle credibilidad o fuerza demostrativa a aquellas atestaciones que se muestren alineadas con “...un modelo preconcebido de exposición de respuestas<sup>1</sup>...” en la medida en que, “...lo que se pretende con la prueba es que el tercero brinde su propia versión de lo que conoció o percibió a través de sus sentidos, de tal manera que en el trámite se logre, a partir de esos dichos y de los demás elementos de convicción, reconstruir la verdad de los acontecimientos<sup>2</sup>...”; empero, si bien es cierto, las personas llamadas a juicio en el transcurso

<sup>1</sup> Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, sentencia SL3160 de 2019.

<sup>2</sup> Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, sentencia SL3266 de 2022.

del proceso incurrieron en múltiples apreciaciones y conclusiones subjetivas abiertamente innecesarias y expusieron un relato similar, no lo es menos, que su versión de los hechos conservó su veracidad al analizarse de forma conjunta con el resto de elementos probatorios recaudados, como lo son, los documentos arriba descritos que respaldan la ciencia de su dicho; no saliendo por tanto avante la crítica del aquí apelante en este puntual aspecto.

Con respecto a la relevancia de la prueba testimonial en tratándose de compañeros de trabajo, la Corte Suprema de Justicia en decisión 22842 de 2004, aquilató:

*«(...) En efecto, cabe advertir inicialmente que no es atendible la alegación según la cual los testimonios fueron mal apreciados por las declarantes por haber entablado un proceso laboral contra la compañía demandada por los mismos hechos debatidos en el que ahora ocupa la atención de la Corte, pues esa circunstancia no fue inadvertida para el Tribunal, que consideró que la tacha efectuada sobre esos testigos fue extemporánea, cuestión que la censura no controvierte, y que no se puede pensar que un testimonio sea sospechoso cuando se trata de “las personas presenciales de los hechos, porque los sufrieron igual que los demás trabajadores, porque asistieron al mismo lugar, el día hora (sic)” (folio 164 del cuaderno del Tribunal).*

*Este razonamiento para la Corte no es notoriamente desacertado, porque si se da una circunstancia que involucra al testigo con el hecho del cual tiene conocimiento, el juez debe sopesar la declaración y no desestimarla por esa sola razón, pues si el declarante estuvo presente cuando sucedieron los hechos y puede dar noticia acerca de ellos, su versión puede ser fundamental para establecer la verdad real.*

*Por tal razón, ha explicado esta Sala de la Corte:*

*“Empero, las reglas de la sana crítica no obligan a negarle credibilidad a un testigo por la sola circunstancia del interés que pueda en él existir, ya que difícilmente habrá un proceso laboral en el cual quienes declaran no tengan alguna relación o bien con el patrono, por ser empleados directivos o representantes del mismo frente a los demás trabajadores, o bien con el trabajador, por ser sus compañeros de labor o por la circunstancia de pertenecer al mismo sindicato. En un proceso laboral lo usual es que quienes rinden testimonio son las personas que conviven en la empresa y que entre sí tienen tratos de diferente índole, unos jerárquicos, otros de amistad, o al menos de compañerismo, e incluso relaciones inamistosas, por ser también natural que la convivencia pueda generar discordias o desavenencias, e incluso ‘celos profesionales’.*

*Por todos estos especiales motivos la labor del juez laboral en ejercicio de las amplias facultades que le confiere el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo debe ser especialmente cuidadosa, y debe por ello el juzgador extremar su prudencia y su buen juicio para no caer en el facilismo de negar credibilidad a un testigo por circunstancias que en procesos de naturaleza diferente serían motivo fundado para admitir una tacha o poner en serias dudas la franqueza y veracidad de lo declarado por el deponente” (Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de Casación Laboral del 4 de octubre de 1995. Radicado 7202). (...)»*

En norte a buscar una adecuada solución al escollo que plantea el asunto litigioso y probado como está la prestación personal del servicio del señor EDUIN DE JESÚS GÓMEZ GALLEGUO

a favor de PROSEGUR, se activa la presunción *iuris tantum* contenida en el artículo 24<sup>3</sup> del CST, y con ello, se traslada la carga de la prueba a las sociedades demandadas a fin que desvirtuaran los elementos propios de un contrato de trabajo; los que memora la Sala se circunscriben a **i.** La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y; **ii.** Un salario como retribución del servicio.

Por su parte, las accionadas sustentan su defensa en la condición de contratistas independientes que detentaban las sociedades EMPOSER SAS y SEGURIDAD COSMOS LTDA respecto de PROSEGUR para la prestación del servicio de vigilancia fija y móvil con armas de fuego, así también el de transporte de valores con un esquema de seguridad especializado, como da cuenta el contrato de prestación de servicios y el de colaboración empresarial allegados (págs.12 a 26, doc.11, carp.01; doc.33, carp.01; págs.164 a 168, doc.02, carp.01; págs.27 a 31, doc.11, carp.01; doc.56, carp.01); postura que pretenden reforzar al tener a su cargo cada una de estas sociedades, el reconocimiento y pago a favor del demandante de los salarios y demás prestaciones sociales durante el tiempo que perduró la prestación personal del servicio de aquel. Puestas así las cosas y a pesar que, en efecto, la decisión fustigada no se ocupó de elucidar este aspecto puntual de la controversia, lo cierto es que el ejercicio conclusivo al que arriba la Sala resulta coincidente al vertido por el *a quo* en el proveído revisado, aunque por otras razones, como a continuación se pasa a exponer.

De acuerdo con la tesis de la defensa, para la Sala, se evidencia que relación comercial entre las sociedades demandadas se enmarca en la figura denominada tercerización laboral o descentralización productiva, definida como aquella estrategia de administración empresarial donde la organización o unidad productiva toma la decisión de externalizar determinados procesos o actividades a través de un contratista independiente experto, con quien a su vez se celebra un vínculo comercial, civil o de derecho administrativo, -dependiendo del servicio y la naturaleza jurídica de las partes-, con el objetivo de optimizar sus recursos.

En este derrotero y atendiendo a la definición de la figura de descentralización productiva, huelga precisar que como su característica insoslayable se revela la autonomía técnica, administrativa y financiera del contratista en la ejecución de la actividad empresarial para la que fue contratado por un precio determinado, asumiendo también los riesgos de su propia gestión y contando con plenas facultades para vincular al personal que considere idóneo y necesario para realizar la labor contratada, frente a quienes valga decir, ostentan la calidad de verdadero empleador. En razón a lo anterior, en principio, entre el beneficiario o contratante

---

<sup>3</sup> CST, artículo 24. Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

de la obra o servicio y los trabajadores del contratista no se configura ningún tipo de contrato laboral.

Por lo anterior, era presupuesto imperativo para demostrar la calidad de contratista alegada por las sociedades EMPOSER S.A.S. y SEGURIDAD COSMOS LTDA, acreditar al menos la correcta y completa ejecución del contrato de prestación de servicios y de colaboración que fueran suscritos con PROSEGUR, así como la autonomía e independencia técnica, administrativa y financiera propia de esta clase de vínculos para desarrollar el objeto contractual dentro del marco de las obligaciones contraídas en virtud de la relación comercial que defienden; todo ello conforme con el principio de la carga de la prueba<sup>4</sup>.

La Sala de Casación Laboral<sup>5</sup> de la Corte Suprema de Justicia, ha adocinado de manera pacífica y reiterada que *[e]n efecto, al tenor de lo explicado en la sentencia CSJ SL467-2019, mediante el outsourcing o cualquier tipo de sociedades que actúen como contratistas independientes, es viable que el empresario se concentre en actividades del negocio principal y descentralice las labores de apoyo que no le producen lucro o acceda a proveedores que por su especialización o especialidad, le ofrezcan servicios a costos más reducidos de los que le implicaría asumir la función directamente; empero, en ese contexto, la tercerización nunca podrá ser utilizada como una herramienta que atente contra los principios mínimos del derecho al trabajo previstos por el artículo 53 de la CP<sup>6</sup>, concluyendo más adelante que:*

*“...[P]ara que sea válido el recurso a la contratación externa, a través de un contratista independiente, la norma exige que la empresa proveedora ejecute el trabajo con sus propios medios de producción, capital, personal y asumiendo sus propios riesgos. Por ello, la jurisprudencia del trabajo ha dicho que **el contratista debe tener «estructura propia y un aparato productivo especializado» (CSJ SL467-2019), es decir, tratarse de un verdadero empresario, con capacidad directiva, técnica y dueño de los medios de producción, y con empleados bajo su subordinación. Si la empresa prestadora no actúa como un genuino empresario en la ejecución del contrato comercial base, bien sea porque carece de una estructura productiva propia y/o porque los trabajadores no están bajo su subordinación, no se estará ante un contratista independiente (art. 34 CST) sino frente a un simple intermediario que sirve para suministrar mano de obra a la empresa principal; o dicho de otro modo, se interpone para vincular formalmente a los trabajadores y ponerlos a***

<sup>4</sup> CGP, artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

<sup>5</sup> Bajo tales parámetros, la Corte en la sentencia CSJ SL4479-2020, explicó que: [...] para que sea válido el recurso a la contratación externa, a través de un contratista independiente, la norma exige que la empresa proveedora ejecute el trabajo con sus propios medios de producción, capital, personal y asumiendo sus propios riesgos. Por ello, la jurisprudencia del trabajo ha dicho que el contratista debe tener «estructura propia y un aparato productivo especializado» (CSJ SL467-2019), es decir, tratarse de un verdadero empresario, con capacidad directiva, técnica y dueño de los medios de producción, y con empleados bajo su subordinación. Si la empresa prestadora no actúa como un genuino empresario en la ejecución del contrato comercial base, bien sea porque carece de una estructura productiva propia y/o porque los trabajadores no están bajo su subordinación, no se estará ante un contratista independiente (art. 34 CST) sino frente a un simple intermediario que sirve para suministrar mano de obra a la empresa principal; o dicho de otro modo, se interpone para vincular formalmente a los trabajadores y ponerlos a disposición de la empresa comitente. Estos casos de fraude a la ley, conocidos en la doctrina como «hombre de paja» o falso contratista, se gobiernan por el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, en virtud del cual la empresa principal debe ser catalogada como verdadero empleador y la empresa interpuesta como un simple intermediario que, al no manifestar su calidad, debe responder de manera solidaria. Por tanto, si bien la tercerización laboral es legítima, lo que no es legal es que a través de dicha figura las empresas se desprendan de sus plantillas para entregarlas a terceros que carecen de suficiente autonomía empresarial, bien sea que adopten la forma de cooperativas de trabajo asociado, sociedades comerciales, sindicatos (contrato sindical), empresas unipersonales, asociaciones u otro tipo de estructuras jurídicas.

<sup>6</sup> Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, sentencia SL017 de 2023.

**disposición de la empresa comitente.** Estos casos de fraude a la ley, conocidos en la doctrina como «hombre de paja» o falso contratista, se gobiernan por el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, en virtud del cual la empresa principal debe ser catalogada como verdadero empleador y la empresa interpuesta como un simple intermediario que, al no manifestar su calidad, debe responder de manera solidaria. **Por tanto, si bien la tercerización laboral es legítima, lo que no es legal es que a través de dicha figura las empresas se desprendan de sus plantillas para entregarlas a terceros que carecen de suficiente autonomía empresarial, bien sea que adopten la forma de cooperativas de trabajo asociado, sociedades comerciales, sindicatos (contrato sindical), empresas unipersonales, asociaciones u otro tipo de estructuras jurídicas”.** –Negritas intencionales de la Sala-

Conforme con lo anterior, la Sala, en un primer nivel de análisis, verificará la actividad económica de las sociedades convidadas a juicio y la clase de vínculo que existió entre ellas para mayor comprensión del punto neurálgico de la controversia, y así determinar el contenido y alcance de las relaciones comerciales que denuncia el recurrente como no apreciadas. De esta manera, revisado el certificado de existencia y representación incorporadas, se tiene que PROSEGUR SA fijó como su actividad económica principal “...la prestación del servicio de transporte, custodia, recaudo, almacenamiento, procesamiento, y manejo de todo tipo de valores y sus actividades conexas...” (págs.208 a 215, doc.02, carp.01; doc.05, carp.01), pudiendo desarrollar para el cumplimiento de su objeto, las labores secundarias de:

**1). Transporte y logística de bienes valorados, entendido este último como el proceso de almacenamiento, embalaje, distribución y transporte de bienes con valor intrínseco, especialmente pero sin limitarlo a ello, de dinero en efectivo; 2) La movilización de especies valoradas o su custodia y almacenamiento temporal; 3) La prestación del servicio de recibo de dinero para su clasificación y empaque; 4) La prestación del servicio de negociación por efectivo de cheques otros títulos valores o consignación de cheques; 5) La prestación del servicio de pago de nóminas; 6) La movilización, custodia y/o almacenamiento de archivos magnéticos, cintas de archivos, microfichas, discos duros, discos compactos y similares; 7) La prestación del servicio de asesoría o consultoría en áreas de seguridad, custodia o almacenamiento de valores; 8) La prestación del servicio vigilancia fija y escolta asociada al transporte de valores; 9) Adquirir, electrónicos y/o administrar, operar y enajenar equipos de comunicación para el transporte y seguridad de que trata el objeto social principal; 10) La administración parcial o total de cajeros electrónicos propiedad de entidades financieras o de terceros; 11) La prestación de los servicios de recaudo y administración de bienes y valores; 12) Intercambio de moneda fraccionaria por mayor denominación y viceversa; 13) Hacer o recibir pagos de cualquier naturaleza para entidades públicas y privadas; 14) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y negocios directamente relacionados con su objeto social, que sean necesarios o conducentes para el logro de ese fin...”** (págs.208 a 215, doc.02, carp.01; doc.05, carp.01). -Negritas intencionales de la Sala-

A su turno, SEGURIDAD COSMOS LTDA, estipuló como actividad económica principal “[l]a prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas mediante la utilización de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 6. Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, prestar el servicio conexo de asesoría, consultoría e investigación en seguridad privada”. (págs.28 a 34, doc.02, carp.01)

Del análisis de las anteriores probanzas, se muestra razonable inferir que **i.** La sociedad PROSEGUR delegó en su contratista una labor esencial para la correcta explotación del negocio de *“...transporte, custodia, recaudo, almacenamiento, procesamiento, y manejo de todo tipo de valores y sus actividades conexas...”*, y; **ii.** Dado que el giro ordinario de los negocios de SEGURIDAD COSMOS LTDA, se encuentra limitado casi que en forma exclusiva a actividades de seguridad privada y de vigilancia, esta forzosamente debe contar con los medios de producción y elementos de trabajo mínimos para garantizar su normal y correcto funcionamiento dentro del eje propio de su actividad, pues de lo contrario materialmente, no puede y no podrá explotar la actividad empresarial lucrativa plasmada en su objeto social.

Con esta perspectiva y de cara a las conclusiones enunciadas, la Sala encuentra que entre la sociedad SEGURIDAD COSMOS LTDA y PROSEGUR fue celebrado un contrato de colaboración empresarial a partir del 08 de agosto de 2013, el que tenía por objeto conjunto *“...la prestación de a terceros de Servicios de Transporte de Valores, con un esquema de Seguridad Especializado (en adelante, individual o conjuntamente denominados, “Los Servicios”); acordando que la sociedad SEGURIDAD COSMOS LTDA debía aportar entre otros, “...(ii) (...) los recursos necesario(sic) para prestar los servicios de seguridad, establecidos en el numeral anterior, tales como armas, equipos de comunicación, guardas, escoltas y cualquier otro tipo de personal que establezca la normativa vigente para la prestación de los servicios de seguridad, el cual no tendrá ningún tipo de subordinación con Prosegur, por lo que será única y exclusiva responsabilidad de Cosmos y el cuál deberá cumplir con los estándares necesarios para la prestación de los servicios de seguridad”; “(iv) Aportar el armamento que utilice el personal que preste Los Servicios de Seguridad y garantizar que dichos elementos se encuentren en óptimas condiciones”; “(v) Conforme lo requiera el servicio y lo acuerden internamente las partes, aportar los medios de comunicación que eventualmente se requieran para la ejecución de Los Servicios. De lo anterior, se dejará constancia por escrito”, y; “(vi) Realizar la capacitación al personal que preste los Servicios”* (págs.12 a 26, doc.11, carp.01; doc.33, carp.01).

Otro tanto ocurrió con la relación comercial sostenida con la sociedad EMPOSER S.A. y THOMAS GREG & SONS TRANSPORTADORA DE VALORES S.A., hoy PROSEGUR, dentro del contrato de prestación de servicios independientes de escolta y vigilancia fija y móvil con armas de fuego (págs.164 a 168, doc.02, carp.01; págs.27 a 31, doc.11, carp.01; doc.56, carp.01), el cual tuvo por objeto el *“...suministro por parte del CONTRATISTA y en favor del CONTRATANTE, del servicio de escolta y vigilancia fija y móvil con armas de fuego en los lugares, instalaciones y bienes muebles e inmuebles que EL CONTRATANTE requiera a nivel nacional, y los cuales acordarán previamente las partes de acuerdo con la necesidad del*

*CONTRATANTE y disponibilidad del CONTRATISTA para el efecto. Para tal efecto, **el servicio de vigilancia aquí contratado se prestará con el número de hombres armados que sean requeridos previamente por EL CONTRATANTE, los cuales estarán altamente calificados y completamente uniformados y dotados con el equipo necesario para llevar a cabo y en buen término el objeto del presente contrato. Los elementos y armas que deberán portar los hombres suministrados por EL CONTRATISTA, serán dispuestos en cada requerimiento de servicio que realice EL CONTRATANTE.** PARAGRAFO PRIMERO. Para tal efecto, EL CONTRATANTE indicará previamente al CONTRATISTA, los lugares, bienes, personas o áreas a los cuales deberá prestar el servicio; destacándose como obligación de EMPOSER S.A.S. la de **“[r]emover y relevar del servicio al personal de vigilantes que EL CONTRATANTE indique, así como los que incumplan o desacaten las instrucciones impartidas por cualquiera de las partes”**. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-*

Con fundamento en el objeto y las obligaciones pactadas por los contratantes en lo que incumbe a la tercerización del servicio de vigilancia y seguridad con personal armado atrás descritas, pondera la Sala, que la parte accionada no probó la correcta y completa ejecución de dichos contratos así como tampoco la autonomía técnica, administrativa y financiera aludida; nótese que no fue allegado medio de prueba alguno que diera cuenta de los elementos, herramientas o experticia que EMPOSER S.A.S. y SEGURIDAD COSMOS LTDA puso a disposición de PROSEGUR para la prestación del servicio de acuerdo con los requerimientos que fueran solicitados por esta como contratante; llamando poderosamente la atención que aun las capacitaciones, que eran del resorte de SEGURIDAD COSMOS LTDA, eran dirigidas y ejecutadas por PROSEGUR.

De igual forma, PROSEGUR se reservó para sí la facultad irrestricta e incondicional de remover y relevar del servicio al personal contratado por EMPOSER, lo que se traduce en un abierto desconocimiento de las características mínimas de autonomía que reviste la figura del contratista o de la tercerización laboral; lo que termina por corroborar el hecho de que el único recurso que suministraba SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S. eran los trabajadores que ponía al servicio de PROSEGUR, pues no de otra forma se explican las particulares condiciones que rodearon la prestación de dichos servicios de vigilancia.

En consecuencia, es dable afirmar que la suscripción del contrato de prestación de servicios y el de colaboración allegados a la foliatura, esta revestida de una mera apariencia o formalidad en aras de encubrir un suministro irregular de personal de SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S. junto con la verdadera relación laboral del impulsor del juicio con PROSEGUR. Conclusión que no varía con las documentales arrimadas al cartulario y que dan

cuenta del pago de salarios y prestaciones sociales junto con la afiliación y pago de aportes al SGSSS por cuenta de SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S., en atención a que los anteriores elementos probatorios por si solos no prueban el uso de la figura de la tercerización laboral de los servicios de seguridad y vigilancia contratadas dentro de un marco legal, al no poder inferir de aquellos la presunta independencia con la que actuaban los contratistas, dando cuenta, a lo sumo, que aquellas sociedades asumían el pago de los salarios del extremo activo y ejercían por tanto una intermediación que bien puede denominarse parcial<sup>7</sup>, sin mayores indicios de la subordinación jurídica a la que supuestamente se encontraba el actor.

Adunado a ello, el hecho de no encontrarse constituida la demandada PROSEGUR como sociedad de responsabilidad limitada no la releva de la carga probatoria que le incumbía para así justificar la estrategia de descentralización productiva a la que acudió, pues si bien es cierto, conforme con lo señalado en el artículo 8 del Decreto 356 de 1994, la empresa que preste el servicio de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad fija, móvil y/o escoltas, debe estar constituida como sociedad de responsabilidad limitada; también lo es que, conforme lo consagra el parágrafo 2 de tal disposición, las empresas constituidas con anterioridad a la publicación de tal decreto -Diario Oficial No 41.220, de 11 de febrero de 1994-, podían conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo allí dispuesto<sup>8</sup>; excepción que le resulta aplicable a la accionada PROSEGUR, como quiera que según el certificado de existencia y representación legal (págs.208 a 215, doc.02, carp.01; doc.05, carp.01), fue constituida mediante escritura pública 2620 del 5 de julio de 1963, inscrita el 11 de ese mismo mes y año; por tanto el tipo societario no se constituye como una restricción para la prestación del servicio de vigilancia.

Con fundamento en todo lo anterior y ante el endeble ejercicio probatorio desplegado por la parte accionada, se mantiene intacta la presunción de la existencia de una relación laboral regida por un contrato de trabajo entre el señor EDUIN DE JESÚS GÓMEZ GALLEGO en calidad de trabajador y PROSEGUR en calidad de empleador, tal y como fuera asentado en la decisión confutada; inferencia a la que se acude para rechazar también los defectos en la afiliación del accionante a las organizaciones sindicales de empresa que se encuentran constituidas en PROSEGUR.

<sup>7</sup> Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, sentencia SL887 de 2018: La Corte, SL, 6 dic. 2006, rad. 25713, argumentó: *Teniendo como demostrado que entre las partes en litigio existió un contrato de trabajo, y que entre las partes intermedió la Cooperativa, pero que dicha intermediación no es real ni válida, pues la misma únicamente actuó como intermediaria para que la empresa demandada soslayara el pago de las prestaciones sociales del empleado; resulta claro para la Sala que debe imponerse la condena solicitada. En efecto, de acuerdo a la prueba testimonial y documental recaudada en el proceso, no resulta demostrada la verdadera participación de la Cooperativa en la prestación de los servicios del actor salvo en el pago de las retribuciones a él asignadas, quedando en evidencia que el contrato suscrito entre la empresa y la Cooperativa solo registra una intermediación parcial, que no puede ser usado para dar por demostrada la buena fe de la empresa contratante, pues nada indica que en efecto tal contrato se hubiera cumplido efectivamente y hubiera gobernado la prestación de los servicios de marketing, mercadeo y servicio al cliente. El material probatorio recaudado indica, como se ha señalado en precedencia, que el servicio prestado por el accionante fue organizado, dirigido y definido plenamente para fines de su ejecución por la empresa Coorserpark SAS; situación esta que excluye que tal empresa pretenda fundar su buena fe en la creencia de haber utilizado los servicios del accionante como consecuencia de una actividad organizada y desarrollada por la Cooperativa.*

<sup>8</sup> **Decreto 356 de 1994, artículo 8. Definición.** Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la utilización de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 6 de este decreto. PARAGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de estos servicios salvo el desarrollo de servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en seguridad. PARAGRAFO 2o. Las empresas constituidas con anterioridad a la publicación del presente decreto podrán conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo establecido en este artículo

De otra parte, la Sala no encuentra la infracción que invoca el apoderado judicial de las demandadas en lo que respecta a las facultades *ultra y extra petita*<sup>9</sup> con la extensión de las condenas, por vía de solidaridad, a las sociedades SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S., pues la calidad de simple intermediario de las mismas fue alegada desde el escrito inaugural, particularmente en la narración del hecho séptimo<sup>10</sup>, lo que naturalmente permitió su discusión, y tanto más importante, su demostración en juicio. Por razón de lo anterior, el cargo no está llamado a prosperar.

Finalmente, se desestiman de manera liminar los argumentos que sustentan el ataque a las pruebas de oficio decretadas por el *a quo*, al ser contrario a los fines del recurso de alzada, pretender revivir etapas procesales ya surtidas en primera instancia; siendo deber de los contendientes manifestar su disenso dentro de las oportunidades procesales que correspondían, esto es, al momento del decreto de los medios de prueba, o bien, cuando se dispuso el cierre de dicha etapa probatoria.

Como corolario de lo expuesto y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes descritas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto declaró la existencia de la relación de trabajo entre el demandante señor EDUIN DE JESÚS GÓMEZ GALLEGO y la sociedad PROSEGUR, junto con la responsabilidad solidaria de las sociedades EMPOSER S.A.S. y SEGURIDAD COSMOS LTDA, pero por las razones aquí esbozadas.

### 3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y advirtiendo que el recurso de apelación interpuesto por las sociedades TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A., SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S. no salió avante, a su cargo se impondrán costas procesales. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho y en favor del demandante, la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, equivalente a \$1.160.000,00 para cada una de las demandadas.

<sup>9</sup> En lo que tiene que ver con la facultad *extra petita* discierne la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que se "requiere rigurosamente que los hechos que originan la decisión (i) hayan sido discutidos en el proceso, y (ii) que estén debidamente acreditados, a fin de no quebrantar los derechos constitucionales al debido proceso con violación de los derechos de defensa y contradicción de la llamada a juicio." (SL3614 de 2020). Resaltando que "la determinación de la falta de congruencia de una providencia, va estrechamente ligada al análisis de parámetros que surgen con ocasión de la confrontación entre la sentencia, las pretensiones, los hechos planteados en el escrito primigenio y las excepciones formuladas por la pasiva, ejercicio del cual es doble determinar si la acusación de incongruencia derivada de la apreciación errónea de elementos de convicción tales como, la demanda, su contestación, que pesa sobre el fallo fustigado resulta o no fundada". (SL 21 de mayo de 2010, rad. 33866, SL3980-2021)

<sup>10</sup> **Hecho 7. Es un hecho cierto y susceptible de ser confesado que empresa COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A., contrató a mi poderdante de manera fraudulenta utilizando la intermediación de dos aparentes empleadoras denominadas Emposer LTDA y la empresa Seguridad Cosmos LTDA., quienes fungieron como supuestas empleadoras de mi poderdante,** mientras desarrollaba labores propias de la empresa COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A., dentro de los extremos temporales del 13 de febrero de 2004 hasta el día 29 de diciembre de 2020. (pág.280, doc.02, carp.01)

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **4. RESUELVE**

**PRIMERO:** CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el 06 de septiembre de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por EDUIN DE JESÚS GÓMEZ GALLEGU, en contra de las sociedades TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A., SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S., pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUNDO:** COSTAS en esta instancia a cargo de las sociedades TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A., SEGURIDAD COSMOS LTDA y EMPOSER S.A.S., fijándose como agencias en derecho para cada una de ellas y en favor del demandante señor EDUIN DE JESÚS GÓMEZ GALLEGU, la suma de un SMMLV equivalente \$1.160.000,00.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiéndose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

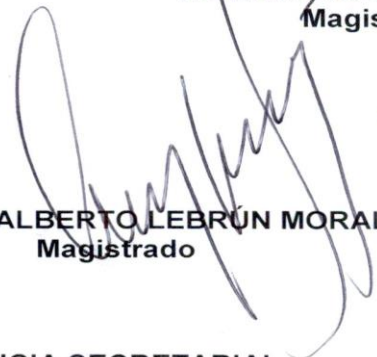
Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**  
Magistrado Ponente



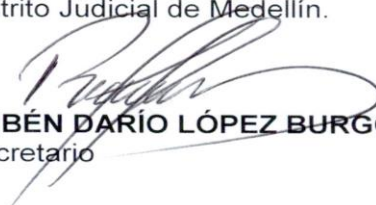
**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**  
Magistrado



**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario